



Ecuador empantanado en la polarización y la violencia

Milagros Aguirre A.

Quito, octubre de 2025

Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania

No es fácil entender lo que está pasando con el país hoy. Hay dos relatos contrapuestos, como las dos caras de una moneda. Y una situación de violencia de la cual parece difícil salir. Al contrario, parece que el país se va hundiendo en la desesperanza y en la confrontación permanente (ideológica, política, de clase). El final no será feliz como en los cuentos: si se siembra viento, se cosechan tempestades. Ecuador vive ahora una de sus peores tormentas. El tejido social está roto, fragmentado. Cada sector vive su propia burbuja y quiere imponer su razón a la fuerza, desde la intolerancia y la falta de respeto, desde la incomprensión del país plurinacional, desde la ignorancia y desde el odio.

Hay quienes, en justicia, reclaman el derecho al pataleo y también aquellos prefieren ver para otro lado. Hay quienes apoyan la paralización, quienes la rechazan y también quienes la ignoran. Mientras en Quito se concentraba un enorme contingente militar (siete mil militares, tres mil policías, con tanques, tanquetas, abundantes gases lacrimógenos, balas de goma y toletes) para impedir la realización de una nueva marcha de protesta convocada para el 12 de octubre, en Guayaquil se celebraba con desfile los 205 años de su independencia.

El país polarizado, empantanado en discusiones altisonantes a todo nivel, destilando violencia e indignación, pero sin querer buscar una salida.

Los reclamos oficiales

Dice la narrativa oficial que el paro convocado por la dirigencia de CONAIE, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, tiene financiamiento del narcotráfico y de las mafias que están a cargo de la minería ilegal y del contrabando de combustible. También dice que los manifestantes son terroristas, violentos.

Prueba de ello, lo dicen en casi todos los medios de comunicación, son los atentados primero a un convoy llamado humanitario en el que participaron dos embajadores (Italia y Unión Europea) y el Nuncio Apostólico (el mayor representante de la iglesia católica) en Imbabura y luego una caravana atacada a piedrazos en El Tambo con la intención de atentar contra el presidente. Muestran las huellas de un carro apedreado.

Con esos dos supuestos —terrorismo y financiamiento del narcotráfico— el gobierno, que ha decidido no dar su brazo a torcer, ha puesto en vigor una serie de estrategias para frenar el paro que van desde congelar cuentas bancarias hasta militarizar las ciudades y detener a manifestantes, pasando por decretar cuatro días de feriado para, supuestamente, bajar la tensión.

Quienes apoyan al gobierno argumentan que hay que apoyar al presidente, que la gente quiere trabajar, que los manifestantes atentan contra otros ciudadanos que quieren trabajar y movilizarse libremente para salir adelante, que los

manifestantes han secuestrado ciudades e impedido el trabajo digno, que, así como el derecho a la resistencia está escrito en la Constitución, esta también protege el derecho al trabajo y sanciona el bloqueo de vías. Apoyan también la medida económica de eliminación del subsidio del diésel, como una medida de ajuste necesaria.

Aplauden la “mano dura” para controlar el paro. Y acusan a los indígenas de oponerse al desarrollo, de haber secuestrado a militares, de haber dañado bienes públicos, de impedir la circulación de ambulancias, de extorsionar a quienes, desde sus propias comunidades, están en contra de la paralización para obligarlos a parar y de afectar directamente la economía de sus propias ciudades, impidiendo el transporte de alimentos y provocando el cierre de negocios. Además, acusan a los indígenas de estar manipulados por redes criminales, unas vinculadas con la minería y otras, vinculadas con el correísmo e incluso a grupos subversivos como las FARC o el ELN de Colombia, con intereses en la minería informal.

Algunos analistas han puesto en la mesa la contradicción de la protesta por la eliminación del subsidio al diésel cuando la lucha indígena ha sido contraria al extractivismo, en defensa de la naturaleza, antipetrolera y minera.

“Los dirigentes indígenas quieren imponer sus condiciones, pero no han ganado las elecciones ni en sus provincias”, argumenta el presidente (argumento por cierto ya conocido), insistiendo en que no va a ceder ni un milímetro, no va a echarse para atrás en la medida de eliminación del subsidio del diésel ni en ningún otro reclamo. No quiere mostrarse timorato ni débil ante la presión social.

El ministro del Interior, quien preside el llamado Bloque de Seguridad, se ha encargado de evitar, a toda costa, las manifestaciones en la capital, mostrando una fuerza disuasiva impresionante. Ha dado declaraciones en las que muestra como un triunfo haber impedido que los manifestantes ingresen a predios como la Casa de la Cultura o la Universidad Central, antes llamadas Zonas de Paz y las ha calificado de centros logísticos para causar disturbios.

Los reclamos del movimiento indígena y organizaciones sociales

En una entrevista con Fernando Rincón, el periodista de CNN, Marlon Vargas, presidente de CONAIE ha dicho que todo estaba en paz hasta la decisión de la eliminación del subsidio al diésel que va a encarecer todo, pero que la lucha no es solo por eso sino por la educación y la salud, que los indígenas no son violentos, que su protesta es pacífica, que no van armados, salvo con algunas lanzas usadas por las comunidades amazónicas, que son solo símbolos de resistencia. Y que el gobierno ha decidido estigmatizarlos poniendo sobre ellos adjetivos como terroristas y narcotraficantes, adjetivos usados ya por gobiernos anteriores. Que la violencia es oficial: que no hay nada más violento que el maltrato permanente y sistemático a las clases populares y a los indígenas, los

problemas de acceso a la salud, la inseguridad, la pobreza, la injusticia y el total abandono estatal.

Refutan la narrativa oficial con otras versiones: no hubo nunca militares secuestrados sino rescatados pues, luego de la muerte de un comunero, Efraín Fuérez (disparado por la espalda y en el que también fue agredido un compañero suyo mientras intentaba auxiliarlo), la masa enfurecida quiso lincharlos y hacer justicia por propia mano. Los militares fueron puestos a buen recaudo y luego sometidos a la justicia indígena, dieron su testimonio y pidieron disculpas a los comuneros antes de ser liberados. Tampoco, dicen, hubo ataque a la caravana presidencial, es decir, hubo desmanes porque el pueblo se indigna, porque la caravana fue a provocar, porque el gobierno quiere victimizarse, pero el presidente no estaba ahí (y circulan en redes sociales imágenes de Noboa bajando de un helicóptero militar en algún lugar que se supone que sería El Tambo).

Los indígenas han reclamado a los medios imparcialidad, han pedido a los periodistas que digan la verdad acerca de la violencia oficial y han ofrecido salvoconductos y garantías a la prensa.

A las primeras demandas se suman, ahora, la justicia y reparación por la vida de Efraín Fuérez, el primer muerto resultado de la violencia y la represión. Y se seguirán sumando las demandas que siguen: la liberación de presos (118 en 21 días de paro), los acusados, los que desaparecen.

La violencia del régimen, que ha incluido arbitrariedades y acciones irrespetuosas y degradantes como el corte de pelo a manifestantes indígenas (parte de su identidad), será, seguramente, llevada a instancias internacionales.

Los acumulados de la violencia

Más allá de las narrativas y de los relatos contrapuestos, este nuevo paro no es sino el acumulativo de necesidades insatisfechas y de conflictos no resueltos, además de una polarización política que, de no empezar por resolverse, puede llevar a una guerra civil, a un terrible enfrentamiento entre ciudadanos.

No se puede tapar el sol con un dedo: así como ha habido brotes de violencia en algunos puntos del país por parte de los manifestantes, ha habido una represión extrema, con violencia militar y policial. Sobre todo, militar. Los militares han entrado, por ejemplo, a comunidades de Imbabura, a sacar a la gente de sus casas a patadas, golpeando a mujeres y deteniendo a quienes son y a quienes no lo son. Lo mismo han hecho en barrios populares de Quito, sobre todo en el norte, donde han echado gas lacrimógeno generando una verdadera batalla campal. En San Miguel del Común la población vivió horas de angustia y terror con una desproporcionada presencia militar y policial.

También se pudo ver desproporcionada presencia policial la tarde del martes 7 de octubre, cuando un pequeño grupo de manifestantes se solidarizaba con el

colectivo Kitu Kara cuya sede está en el barrio La Floresta, al centro norte de Quito. Un centenar de policías con escudos, decenas de policías motorizados, se ubicaron en los alrededores con clara intención de evitar la protesta que no era sino una pequeña marcha de jóvenes con tambores y pancartas. Eso sería solo un abre boca para lo ocurrido el 12 de octubre, en una anunciada marcha pacífica que se concentraría en La Villaflora y terminaría en el parque de El Arbolito (lugar emblemático de los paros indígenas). La represión sería mucho mayor, mucho mayor la presencia militar y policial en las calles de Quito, los gases, las arbitrariedades, los ataques a la prensa¹, la persecución a los manifestantes para lograr su dispersión y evitar la concentración. La respuesta: más indignación, los gritos de ¡fuera Noboa! y de ¡asesinos! a los militares y policías. En resumen, la trifulca nacional.

El gobierno ha congelado cuentas bancarias no solo de dirigentes indígenas, sino de organizaciones no gubernamentales, sobre todo, aquellas que trabajan en temas de derechos humanos, conservación o liderazgo en la Amazonía como la Fundación Pacha Mama o Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por la Texaco (UDAPT) y cuentas particulares de muchos simpatizantes del movimiento indígena o de defensores de derechos humanos y de las causas perdidas. Para ello ha aplicado la flamante Ley de Transparencia (que no permite congelamiento de cuentas sin orden judicial y que tiene, por cierto, demandas de inconstitucionalidad).

El conflicto armado interno declarado por el gobierno en 2023 y que marcó el inicio de su mandato parece cobrar sentido: mientras se desata toda esta persecución a dirigentes y defensores de derechos humanos, los muertos siguen apilándose en la costa, en Durán, en Playas, en Manabí, donde las masacres no se han detenido... no hay líderes de carteles con sus cuentas congeladas ni tantos militares o policías combatiendo al narcotráfico en las ciudades más violentas. Tampoco se ha oído de congelamientos de cuentas a militares involucrados en el narco, ni a jueces o fiscales, ni a testaferros de empresas relacionadas que aparecen a diario en los noticieros. Es decir, pareciera que la guerra no es contra la delincuencia sino contra la oposición.

Probablemente no era el momento de una convocatoria a paro nacional: el gobierno no lleva ni seis meses de instalado luego de las elecciones (aunque haya estado un año antes, luego de la salida de Guillermo Lasso, en noviembre del 2023); está aún en la cumbre de su popularidad; el alza del diésel y la eliminación del subsidio era una medida que tarde o temprano iba a suceder. El gobierno aún cuenta con apoyo de las fuerzas del orden y de quienes votaron por él. No era novedad el carácter autoritario del líder ni el clamor de “mano dura” que lo llevó al poder. Era previsible que, ante el descontento o la oposición, el gobierno lanzaría toda su artillería represiva.

¹ Fundamedios registra varias agresiones a la prensa antes y después del 12 de octubre. Los detalles en fundamedios.org.ec La prensa ha sido atacada por manifestantes y por el gobierno.

Pero, además, no está claro si el tema del diésel ha sido el detonante. En principio, no convocabía a mucha gente, por eso la dirigencia indígena amplió las demandas a todas las demandas históricas acumuladas: educación, salud, falta de medicamentos y atención sanitaria, pobreza, abandono, inseguridad, políticas extractivistas, modelo neoliberal... a esas demandas se han sumado muchas otras, de distintos colectivos (y partidos políticos y militancias), unas por el agua, otras por la defensa de la Amazonía, por la defensa de la vida, por la defensa de los territorios, contra las concesiones mineras o petroleras, es decir, todas las demandas insatisfechas y todos los descontentos posibles de los distintos movimientos, comunidades y organizaciones.

La situación de tensión existente en el país no va a terminar pronto. Donde el gobierno ve “control absoluto”, las poblaciones ven brutal represión. Donde el gobierno ve “convoy humanitario”, la población ve un ejército que amenaza, agrede e intimida sobre todo a las poblaciones indígenas, como ha ocurrido en Otavalo este 14 de octubre.

Todo indica que la situación se va a polarizar aún más con el llamado del presidente a una consulta popular para cambiar la constitución (aunque no diga qué pretende con ello). Unos por el Sí, otros por el No. La campaña será una lucha a muerte, unos en contra de la Constitución aprobada en 2008 en Montecristi, otros en su defensa absoluta. Las tensiones van a crecer. Las provocaciones y la violencia como respuesta, también.

El diálogo imposible

Muchas de las demandas de hoy fueron parte de las mesas de diálogo llevadas a cabo luego del paro nacional de 2022. Muchos de los temas y reclamos de hoy calzan en los 218 acuerdos alcanzados entonces, pero congelados luego de la “muerte cruzada” que terminó con el gobierno de Guillermo Lasso. Los dirigentes indígenas se levantaron unilateralmente de las mesas de diálogo y prefirieron apostarle a la caída del presidente Lasso y trabajar por su destitución hasta que él mismo convocó a lo que se llama “la muerte cruzada”. Las heridas y las fracturas quedaron aún más expuestas.

El fin del diálogo de 2022 fue una oportunidad perdida para iniciar la construcción del país intercultural y plurinacional en la que había al menos una hoja de ruta para ir saneando algunos de los problemas del país y, principalmente, de las comunidades indígenas. No parece que a la clase política le interese retomar ese diálogo que implica reconocer los problemas de inequidad del país. Parece mejor dejar las cosas como están, calentar las calles, sumarse a las declaraciones de resistencia permanente (incluso si las demandas son justas) y seguir con el quita y pon de presidentes.

En 2022 las universidades y la Iglesia acogieron el pedido de diálogo del movimiento indígena y las organizaciones sociales. Participaron como facilitadores de las distintas mesas de trabajo junto a representantes del gobierno

y a representantes de las organizaciones sociales y movimiento indígena. Había un plan de seguimiento a los acuerdos alcanzados junto a la cooperación internacional, pues se trataba de un proceso a mediano y largo plazo. Poco a poco el tema se fue diluyendo, no solo por el cambio de gobierno y el poco interés en ello por los nuevos intervenientes en el conflicto, sino también por el abandono de la causa por parte de los mediadores ante la imposibilidad de volver a sentar a los principales actores.

Ahora, luego de 22 días de iniciadas las protestas, no se ve posibilidad de diálogo. El autoritarismo y la intolerancia (del presidente y de algunos de los líderes indígenas) hacen imposible, por ahora, la mínima escucha. Cada uno está instalado en su propia razón y sinrazón. El gobierno acusa a los indígenas de terroristas; los indígenas acusan al gobierno de genocida y asesino; el gobierno acusa a los manifestantes de narcotraficantes; los manifestantes acusan al gobierno de lo mismo.

Demasiado ruido, mucho grito, muchos insultos y descalificaciones, demasiado racismo y clasismo, demasiado resentimiento, desmedida violencia y represión, como para llegar a algún tipo de acuerdo o peor, como para detenerse a pensar en el bien común.

Al contrario, parece ser que la lógica es la de lanzar más gasolina para apagar un incendio. Unos y otros están tensando tanto la cuerda que se va a romper. El descontento, la inequidad, la ausencia del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, son ingredientes de una olla de presión a punto de explotar. Si la respuesta a las demandas insatisfechas no va a ser la mínima escucha, el diálogo y las propuestas para reconstruir ese tejido social, sino al contrario, va a ser la creciente y más dura represión, las botas militares, la virulencia de los discursos políticos, las denuncias de torturas, muertos, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos... Nada bueno puede salir de eso.

Retomar el diálogo y los acuerdos mínimos iniciados en 2022 es urgente y en ello deben intervenir no solamente los actores visibles del conflicto, sino la sociedad en general, los representantes de las iglesias, de las universidades, de la cooperación internacional, de las ONG, los gobiernos locales, los medios de comunicación, periodistas y analistas, los sectores empresariales y gremios. Salir de esta situación también es su responsabilidad. El bien común es responsabilidad colectiva.